



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: DEISY AMPARO MOLINA MOLINA
Demandados: ACP COLPENSIONES, AFP PROTECCIÓN S.A. y la AFP COLFONDOS S.A.
Radicado: 05001 31 05 005 2022 00372 01
Sentencia: S-239

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a revisar **en grado jurisdiccional de Consulta a favor de COLPENSIONES**, la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el día 22 de febrero de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

DEISY AMPARO MOLINA MOLINA demandó a PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la

nulidad y/o ineficacia la vinculación o traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, teniéndose como válida la afiliación al régimen de prima media administrado por COLPENSIONES, sin solución de continuidad, desde el 23 de mayo de 1987. Como consecuencia solicita se les ordene a los fondos privados el traslado de aportes, rendimientos, cuotas de administración, bonos pensionales, mermas del capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, indexados, y debiendo ser aceptados por COLPENSIONES. Pretende además se condene en costas procesales a las demandadas.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones que nació el 18 de octubre de 1965; que inicio su vida laboral el 23 de mayo de 1987 afiliándose al Régimen de prima media hasta junio de 1995 donde alcanzó a reunir 422 semanas de cotización. Señala que en julio 1995 cuando laboraba con EDATEL se afilió a PROTECCION S.A., sin que se le brindara un debido asesoramiento sobre las implicaciones y consecuencias de trasladarse, así como ventajas y desventajas. Indica que no se le explicó que perdería los beneficios del RPM. Manifiesta que cuenta con más de 1800 semanas cotizadas. Que el 23 de mayo de 2013 solicitó ante COLPENSIONES traslado de régimen sin recibir respuesta del respectivo trámite. Y que también presentó la misma solicitud ante PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A. el 10 de agosto de 2022, las cuales fueron negadas.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante. Señala que no es cierto que cuenta con 422 semanas. Expone que son ciertas las solicitudes de traslado y afiliación ante Colpensiones, pero no es cierto que no se le haya dado respuesta. Y manifiesta que no le consta lo demás por ser hechos ajenos a COLPENSIONES. Se opuso además a las pretensiones por carecer de

fundamento fáctico y legal. Como excepciones propuso carga dinámica de la prueba, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, inexistencia de la obligación, inexistencia de vicio en el consentimiento, devolución de cuotas de administración, seguros previsionales, comisiones indexadas, prescripción, imposibilidad de condena en costas y compensación.

Por su parte, PROTECCIÓN S.A. señaló que no le consta ninguna situación dada entre la parte demandante y otra administradora; que es cierta su fecha de nacimiento. Manifiesta que no es cierto que no se le haya brindado información de manera objetiva e integral sobre las características del RAIS, ya que esto si se hizo, toda vez que el traslado se dio a través de un asesor, el cual le brindó la información adecuada y real, realizándole un estudio previo, por lo que el formulario de afiliación goza de toda presunción de legalidad. Se opuso a las pretensiones de la demanda indicando que se está frente a un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos, inexistencia de la obligación de devolver comisión de administración, seguro previsional, aplicación del precedente sobre los actos de relacionamiento y traslado de aportes.

Por último, COLFONDOS S.A. acepta que la fecha de nacimiento de la demandante. Señala que no es cierto que las posibilidades pensionales en el RPM sean ventajosas y en el RAIS no. Manifiesta que es cierta la solicitud de traslado a COLFONDOS S.A. la cual fue negada. Indica que no es cierto que no se le haya brindado una asesoría integral a la demandante. Y señala que no le consta los demás hechos en cuanto se refieren a situaciones fácticas de la demandante ante terceros ajenos de COLFONDOS S.A. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, valides de la afiliación al RAIS, ratificación de la

afiliación a COLFONDOS S.A., prescripción de la acción, compensación y pago.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 22 de febrero de 2023, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, **i) DECLARÓ** ineficaz el traslado de la demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por falta de información, que conllevo a un error en el consentimiento de la demandante al momento de afiliarse a PROTECCION S.A.; **ii) DECLARÓ** que la afiliación al RPMPD de la demandante no ha tenido solución de continuidad en el tiempo en el que ha estado activamente vinculada al Sistema General de Pensiones; **iii) CONDENÓ** a COLFONDOS S.A. a trasladar a COLPENSIONES el 100% de los aportes efectuados por la demandante y cualquier otro valor de la cuenta de ahorro de la actora, incluido frutos y rendimientos que se hubiesen causado, asumiendo con cargo a su propio patrimonio los conceptos de comisiones de administración, pólizas previsionales, fondo de garantía de pensión mínima y para el fondo de solidaridad pensional, que se hubieren deducidos desde la fecha en que se hizo efectiva la afiliación hasta la fecha que se haga el traslado de régimen, debidamente indexados; así mismo **ORDENÓ** a PROTECCION S.A. a trasladar a COLPENSIONES iguales conceptos es decir, comisiones de administración, pólizas previsionales, fondo de garantía de pensión mínima y fondo de solidaridad, debidamente indexados en proporción al tiempo que estuvo afiliada; **iv) CONDENÓ** a COLPENSIONES a recibir los aportes que las AFP PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A. le devuelva y a tener en cuenta el tiempo cotizado en el RAIS como semanas cotizadas que deberán reflejarse en su historia laboral; y **v) CONDENÓ** en costas a COLFONDOS S.A. y a PROTECCION S.A., y **ABSOLVIÓ** a COLPENSIONES de las costas.

La presente decisión se conoce en grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES, toda vez que ninguna de las partes interpuso recurso de apelación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido, la apoderada de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión solicitando que se analice lo referente a la imposibilidad del traslado de la demandante por estar inmersa en la prohibición de los 10 años o menos, además de que solo pretende la declaratoria de la ineficacia por su interés económico. Señala que en el presente caso el engaño no se encuentra válidamente acreditado, por lo que no se puede declarar la ineficacia. Manifiesta que debe tener en cuenta que la demandante es una persona plenamente capaz, suscribiendo el formulario de afiliación de forma libre y espontánea. Y subsidiariamente solicitó que en caso de prosperar la ineficacia se ordene la devolución de todos los rubros recibidos por el fondo privado sin importar sus conceptos, debidamente indexados.

Finalmente, la apoderada de la demandante en sus alegatos manifiesta que se debe confirmar la decisión de primera instancia, toda vez que quedó ampliamente probado que las administradoras de fondo privado no demostraron que hayan cumplido con su deber de información, o que se le haya explicado que podía trasladarse de régimen hasta los 47 años, por lo que debe ser declarada la ineficacia.

C O N S I D E R A C I O N E S:

Esta Sala procede a conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: **i)** la señora DEISY AMPARO

MOLINA MOLINA nació el 18 de octubre de 1965; *ii)* que si bien nunca estuvo en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, si estuvo afiliada al fondo de previsión social administrado por EDATEL S.A. E.S.P.; *iii)* el 30 de junio del año 1995 suscribió el formulario de afiliación a la AFP PROTECCION S.A.¹; y *iv)* posteriormente el 25 de febrero de 2009 realizó traslado a la AFP COLFONDOS S.A.² entidad a la cual se encuentra actualmente vinculada.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993³, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

¹ Folio 27 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

² Folio 24 de la contestación de COLFONDOS S.A.

³ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 *“ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero”*

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de

múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y

- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que los fondos privados hayan brindado, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, los Fondos privados incumplieron con su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, en el año de 1995 al realizarse la transición de EDA a EDATEL quien era que pagaba las pensiones a su trabajadores, trasladaron a todos a PROTECCIÓN S.A., pero que en dicho momento no se les brindó ninguna asesoría como tampoco posterior a la afiliación. Y frente al traslado a COLFONDOS S.A. indica que la empresa donde estaba trabajando aproximadamente hace 4 años la llamaron a retiro voluntario, y ahí es donde un asesor de COLFONDOS S.A. le manifestó que este fondo tenía más beneficios que PROTECCIÓN S.A., alcanzando más rendimientos, sin explicarle más detalles sobre su traslado.

De lo anterior no se deriva -entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo dicho permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Debe advertirse que no es de recibo el argumento de COLPENSIONES en sus alegatos relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frente al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito *“... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”*.

Se advierte además que la decisión en este proceso relacionada con la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A. y posteriormente a COLFONDOS S.A., implicaría **en un principio** que la situación de la demandante retorne a su estado anterior, es decir, como afiliada al fondo de previsión social administrado por EDATEL S.A. E.S.P., debido a la vinculación que para ese entonces mantenía vigente.

Sin embargo, como dicha entidad actualmente no tiene la calidad de administradora de pensiones y como la intención de la demandante plasmada con la solicitud presentada ante COLPENSIONES desde el año 2013, según documento visible en el folio de 175 de la demanda digitalizada, así como con la presentación y contenido de ésta demanda, es la selección del Régimen de Prima Media con Prestación

Definida, será ésta la entidad encargada de recibirla y de activar su afiliación, pues además así lo permite el art. 271 de la propia ley 100 de 1993 cuando dispone que ante una situación que atente contra los derechos del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Norma que se debe complementar con lo establecido en el Decreto 1068 de 1995 por medio del cual se reglamentó la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en los niveles departamental, municipal y distrital y cuyo artículo 2º dispone que una vez entre a regir el Sistema General de Pensiones, *“... los servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima media con prestación definida administrado por el ISS y el RAIS, administrado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP autorizadas por la Superintendencia Bancaria”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMADA** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

Así mismo, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)”

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”

En consecuencia, la decisión deberá ser **CONFIRMADA** en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que la señora DEISY AMPARO MOLINA MOLINA estuvo vinculada a cada entidad.

Esta Sala igualmente advierte que la orden a PROTECCIÓN S.A. y a COLFONDOS S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima deben incluir la respectiva indexación, tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado la indexación en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que “... todas las

cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.”

En consecuencia, la sentencia de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA** en todas sus partes.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el día 22 de febrero de 2023.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3cad17f88ce9192390b636c4dab736ffda1a0e91a02d4ac3c6c2be8befd96116**

Documento generado en 31/08/2023 02:23:28 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>